

**Desarrollo histórico,
factor de divergencia
en el proceso de integración
de la Comunidad Andina de Naciones**

ALICIA BULLA BERMÚDEZ
Profesora Escuela de Economía UPTC

RESUMEN:

En el presente artículo se pretende mostrar que una de las causas que han contribuido al escaso desarrollo de la integración económica en el Pacto Andino, se encuentra en los procesos históricos que ha tenido que sufrir cada uno de los países en su organización política, económica y social, lo que ha generado desde el comienzo una gran heterogeneidad, difícil de superar.

En el proceso de conformación de este grupo se plantea, que a más de integrar países de similar estado de desarrollo, tienen en común el estar ubicados sobre la cordillera de los Andes. Sin embargo, se encuentra que individualmente poseen una dotación diferente de recursos naturales a más de haber desarrollado cada uno su propio proceso histórico.

Cuando varios Estados acuerdan lograr un proyecto común, como el de llevar a cabo un proceso de integración, en este caso de la Subregión Andina, lo primero que se requiere es el conocimiento propio y el de sus integrantes, para poder buscar puntos de convergencia, así como las políticas a desarrollar para lograr los objetivos propuestos.

Palabras clave: integración económica, proceso histórico, convergencia, Comunidad Andina de Naciones, desarrollo, colonización, instituciones, revoluciones, organizaciones políticas y económicas.

ABSTRACT:

The present article attends to show that one of the causes for the scarce development of the economic integration in the Andean Pact is to be found in the different historical processes undergoing each one of political, economical and social organization of their countries. It has generated a great heterogeneity which has been difficult to be overcome from the beginning of that organization.

In the conformation process of this group it is stated the article deals that Andean Pact is integrated by countries of similar developing state, which had in common to be located on the Andean mountain range. However it is noted that each one of them owns a different richness of natural resources besides the fact that each one has developed its own historical process.

When several states come to agree to carry out a common project as an integration process, namely of the Andean Subregion, the first thing required is their own knowledge and that of their members to be able to look for convergence points as well as the policies to be achieve the expected objectives.

Key words: economic Integration, historic process, convergence, Andean community of nations, development, colonization, institutions, revolutions, political and economic organizations.

Introducción

En la actualidad se encuentra un caso exitoso de integración económica, el de la Unión Europea, proceso que han querido emular otros grupos, como ocurre con el de mayor trayectoria en América Latina: el Grupo Andino, hoy con la denominación de Comunidad Andina; sin embargo los resultados obtenidos por este grupo no corresponden con los objetivos planteados. Algunos factores de tipo estructural tanto del orden económico, social o político, se toman como explicativos de tal situación, factores estos que se resaltan en el desenvolvimiento y desarrollo histórico de ellos.

En el presente artículo se pretende mostrar que una de las causas que ha contribuido al escaso desarrollo de la

integración económica se encuentra en los diferentes procesos históricos que han tenido que sufrir cada uno de los países en su organización política, económica y social, lo que ha generado desde el comienzo una gran heterogeneidad, difícil de superar. Aunque los cinco países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, sufrieron el proceso de conquista y colonia por parte de España, dándoles elementos de identidad como la religión y el idioma, cada uno de ellos ya venía construyendo su propia identidad heredada de sus ancestros.

Cuando se conforma el Pacto Andino se plantea que a más de integrar países de similar estado de desarrollo, tenían en común el estar ubicados sobre la cordillera de los Andes. Sin embargo, se encuentra que cada uno de ellos posee una dotación diferente de

recursos naturales, con una particularidad que los identifica, ser monoexportadores hacia países desarrollados. Igualmente la teoría identifica que uno de los factores que ayuda al proceso de integración económica, es, de una parte, el grado de integración que se logre al interior de los países y de otra, los niveles de comercio que se realicen entre los países de la región.

Para poder entender las razones del lento desarrollo del proceso de integración económica de la Subregión Andina, o de los retrocesos que ha sufrido o del relativo auge que se ha suscitado en la década de los noventa, se hace necesario llevar a cabo un conocimiento de los acontecimientos históricos que se han dado en cada uno de los países integrantes, que aunque tienen raíces comunes en sus orígenes, o se encuentran dentro de un espacio geográfico relativamente homogéneo, y tengan otras características particulares como las señaladas por la CEPAL, se puedan entender las razones de la especificidad. El desarrollo de sus sociedades, la organización en sus estructuras de poder, y el grado de participación que estas han tenido en el diseño de sus derroteros, hacen que cada Estado tenga su historia, única e irrepetible, que marca su propia identidad.

Cuando varios estados acuerdan lograr un proyecto común, como el

de llevar a cabo un proceso de integración, en este caso de la Subregión Andina, lo primero que se requiere es el conocimiento propio y el de sus integrantes para poder buscar puntos de convergencia, así como las políticas a desarrollar para lograr los objetivos propuestos.

En el proceso de integración económica de la Unión Europea establecieron como requisitos para los países integrantes el contar con una participación democrática, aspecto este que no ha sido logrado a la fecha en forma real por ninguno de los participantes en la Subregión Andina.

Antecedentes históricos. La herencia de la colonización española

Por orden de la Corona se iba estructurando una organización administrativa, con la correspondiente demarcación de territorios y levantamiento de mapas: virreinos, gobernaciones, dentro de las cuales se encontraban las ciudades y pueblos principales con la estructura de gobierno y administración ejercida por los corregidores. En los virreinos se instituyeron tribunales de justicia denominados la Real Audiencia, conformada por los señores oidores.

Con la presencia de los españoles en las colonias, aunque se quiso transplantar la organización social de la corona, no

era posible pues se presentaban jerarquías y de acuerdo a estas se reclamaban derechos, como en el caso de los hijos de los españoles y extranjeros que conformaron un grupo particular denominado criollos. De otra parte existía población indígena, que al mezclarse conformó otro grupo social, el mestizo; aparte de otros grupos de población: negros y mulatos.

Se establece una relación de dominación-servidumbre, donde esta última se aplica a la población nativa. Creándose una reasignación de la tenencia de la tierra, al despojar a los nativos de sus propiedades, para ser entregadas a los colonizadores según cédula real.

Junto a las instituciones sociales transplantadas llega la religión católica, que con las comunidades religiosas, se encargaron de implantar la práctica del culto, mientras que otras congregaciones religiosas se orientaron a la educación y formación en labores a la población autóctona.

Con las prerrogativas dadas desde la corona y la organización establecida, se impone el pago de impuestos como el quinto de la minería, los diezmos de la agricultura para sostener la iglesia, alcabalas y estancos sobre el tabaco y el aguardiente. (Kalmanovitz, 2002).

La tierra fue asignada en grandes extensiones bajo la forma de encomienda, para cumplir con los mandatos de

la iglesia: la de enseñar a los indígenas la religión cristiana y educarlos bajo sus preceptos. Con el tiempo los encomenderos las hicieron funcionar en explotaciones de tipo feudal.

El periodo de dominación de la colonia se extendió a lo largo de tres siglos, llegando a momentos en que tanto para los criollos, como para la población nativa, el exceso de cobro de impuestos y prebendas ocasionó inconformismos que se expresaron en la conformación de organizaciones y grupos de protesta, buscando mecanismos para crear su propio gobierno. Esta situación se presenta en forma similar en cada uno de los territorios, de tal forma que a comienzos del siglo XIX se han dado los elementos necesarios para reclamar la independencia.

Bolivia adquiere la independencia el 6 de agosto de 1825, esta nominación en honor del Libertador Simón Bolívar. Antes era conocida como el país de Charcas en el lenguaje indígena y de Alto Perú en el periodo de la colonia; Colombia el 7 de agosto de 1819; Ecuador el 24 de mayo de 1822; Perú el 9 de diciembre de 1824 y Venezuela el 24 de julio de 1823.

Proceso de conformación de las repúblicas

Un primer paso fue la delimitación del territorio de cada nueva república, tomando como base las antiguas

divisiones territoriales de virreinos y gobernaciones.

El proceso de ajuste y conformación de las nuevas repúblicas se dio en el transcurso del siglo XIX, con presencia continua de guerras civiles, en unos casos por la toma del poder, en otras por inconformismos, ya que el modelo administrativo adoptado no presentaba mayores diferencias con el aplicado en la colonia, como en el caso de los impuestos y la distribución de la propiedad. Igualmente se presentaron guerras entre países por problemas de límites, como la Guerra del Pacífico (1879) de Chile contra Perú y Bolivia, con resultados negativos al tener que ceder territorio los dos países, siendo el más afectado Bolivia, con la pérdida de la salida al mar y la Guerra del Chaco (1932- 1935) entre Bolivia y Paraguay.

Dentro de los grupos de poder existía el concepto, que un buen desempeño exportador era la clave del éxito, por tal razón los países presentan una alta dependencia del exterior. Bolivia se encuentra entre los principales productores mundiales de plata, desde la época de la colonia, además es uno de los países privilegiados por la dotación natural de recursos, fue proveedor de quina utilizada como antídoto para las fiebres amarillas, que adquirió mayor desarrollo en algunos países de Africa y Asia. En la zona amazónica entró en la explotación del caucho, producto considerado

estratégico y de gran demanda, mercado que luego se concentró en Brasil. En el momento de los conflictos bélicos mundiales fue el proveedor de un bien igualmente estratégico, el estaño.

Antes de la primera guerra mundial Bolivia exportaba más del 20% de la producción mundial de estaño y Ecuador el 15% de la producción mundial de cacao. (Bulmer-Thomas, 1998).

Perú, después del auge exportador del guano en 1880 y más tarde de minerales, cambia de política a partir de la Guerra del Pacífico, diversificando sus exportaciones: caña de azúcar, algodón, café, hoja de coca y caucho, situación favorable gracias a la diversidad de climas.

Un hecho a remarcar en los cinco países, es la alta dependencia de un producto de exportación, como es el caso del café, que en 1913, representaba más del cincuenta por ciento de sus exportaciones y para otras economías constituía el segundo renglón de importancia. Situación parecida se daba para los exportadores de minerales.

En la conformación de las repúblicas cada una tiene opciones de desarrollo muy variado y por tanto diferentes campos de especialización en la producción. En el caso de las plantaciones de banano, sus cultivos se iniciaron a partir de inversión

extranjera directa, en muchos casos estadounidense; los inversores adecuaron grandes extensiones de tierras, generalmente planas para facilitar la mecanización, con fácil acceso al riego. Las empresas actuaban bajo los criterios de la racionalidad capitalista; los cultivos se realizaban en forma extensiva, de tal manera que se transformó su explotación en un enclave en las economías, a la vez que una fuente de malestar social, como fue el caso de las bananeras en Colombia a comienzos del siglo XX, fenómeno que se sigue presentando a lo largo de la zona costera del Atlántico, en parte del territorio del Ecuador y en varios países de Centroamérica. (Dabène, 2001).

La mayor parte de explotaciones mineras funcionan y han funcionado igualmente como enclaves económicos, donde la explotación y aprovechamiento las realizan compañías extranjeras, muchas veces sin el control de las autoridades nacionales y sin la existencia de normas que las regulen, simplemente recibiendo regalías como compensación, sin guardar proporción con el volumen extraído.

De los productos de exportación que no tuvieron comportamiento de enclave económico se encuentra la producción de café. Esta se puede realizar en terrenos de ladera, en extensiones pequeñas y con

vinculación de gran cantidad de mano de obra en su procesamiento, evitando el proceso de concentración del ingreso.

Se tiene como referencia histórica que para 1913, Estados Unidos ya era el principal mercado de exportación para 11 de los 21 países, siendo para la mayoría el único. Era el mayor comprador de café tanto de Brasil como de Colombia. (Bulmer-Thomas, 1998).

La dependencia de un único producto de exportación, así como a un único mercado trae varias consecuencias para las economías, más cuando estas están realizadas por sectores enclaves. Un primer efecto se presenta con la poca vinculación con los demás sectores de la economía, especialmente con los no exportadores, lo cual se constituye en uno de los elementos que van a marcar la presencia del dualismo tecnológico.

Hay un total divorcio entre el sector exportador y el resto de la economía; no se presentan los mecanismos de arrastre, ni la presencia de sectores motrices; simplemente son sectores que se nutren de la extracción de los recursos, trasladando los beneficios a sus economías de origen.

El desarrollo y ampliación de la industrialización tanto de Europa como de los Estados Unidos fue el factor principal de la demanda de bienes primarios desde mediados del siglo

XIX y la primera guerra mundial. A la vez los textiles y las prendas de vestir eran abastecidas con exportaciones británicas, mientras que Estados Unidos lograban el dominio con las exportaciones de alimentos y maquinaria.

El avance en la industrialización y el aumento de la productividad en los sectores textiles de Gran Bretaña, tuvieron como resultado la baja en los precios de estos bienes. Del mismo modo, con la introducción de la máquina de vapor, los costos de transporte se redujeron, presentando en conjunto menores precios de oferta en el mercado mundial. (Bulmer-Thomas, 1998).

Mientras que las exportaciones de los países andinos, no presentan avances en tecnología, ni en nuevos procedimientos de producción, que hayan contribuido a un proceso de crecimiento de la productividad o un avance en el proceso de industrialización.

Muchos de los problemas de exportación se debieron a fallas en la oferta, por los procedimientos rudimentarios utilizados; pero fundamentalmente por el deseo de extracción del máximo beneficio por parte de los empresarios, especialmente en aquellas empresas de capital extranjero y uso intensivo de mano de obra, con bajos costos en términos de salarios.

La práctica de no retribuir a la mano de obra con salarios reales justos, permite explicar la concentración del ingreso y la riqueza en grupos privilegiados como los exportadores o los dueños de grandes extensiones de tierra. El no retribuir con salarios justos, como ya se planteó, a más de haber incidido en el bajo desarrollo del mercado de trabajo, redujo la participación en la economía monetizada, que entre otras razones, pudo influir en la explicación de las bajas tasas de formación de capitales en estas economías y la permanencia de mercados estrechos, limitados a la demanda de bienes para la satisfacción de necesidades básicas.

En el proceso de conformación de las repúblicas, respecto al uso de la tierra se tenían dos problemas: de una parte las grandes extensiones, que aunque presentaran condiciones favorables para su explotación no contaban con medios de transporte adecuado; en algunos países se solucionó en parte con la llegada del ferrocarril, especialmente para aquellas regiones que ofrecían productos exportables. El otro problema se encuentra en la tenencia de la tierra, dado que se mantienen las mismas estructuras desde la colonia, es decir perdura la concentración en la propiedad de la tierra, en haciendas, mientras que gran cantidad de la población se ubica en minifundios.

En las nacientes repúblicas no se encuentran las condiciones que las han

de regir en el campo político. Los gobiernos en la mayoría de los países son asumidos por militares; hay una larga tradición militarista que surge desde el momento de la independencia, a la vez que son quienes han llevado a cabo las guerras en procura de definir territorios. Frente a la casta militar se presentan inconformismos de parte de la sociedad civil, pero en mayor medida al interior de las mismas fuerzas militares, especialmente entre las distintas armas, remarcándose en el panorama la presencia de la inestabilidad política.

La influencia estadounidense. En 1913 es elegido el demócrata Woodrow Wilson, quien considera que el éxito en la conducción de los pueblos se logra mediante la democracia, sustentado en el convencimiento “que cree que los Estados Unidos tienen la misión de defender en todas partes la libertad y la democracia” (Dabène, 2001, 49).

En este sentido el presidente Wilson plantea que a los países de América Latina sólo los puede llevar a la estabilidad política, la instauración de la democracia, tarea que emprende aún recurriendo a la fuerza y las intervenciones militares. En una de sus intervenciones en el Congreso manifestó que “es necesario enseñar a las repúblicas sudamericanas cómo elegir los hombres de calidad” (Dabène, 2001, 49).

Para dar cumplimiento a este principio se promueve la doctrina Wilson, consistente en que ante los Estados Unidos, sólo se reconocen aquellos gobiernos que hayan resultado de un proceso de elección.

En el logro del cumplimiento de esta tarea, se asesora a los países en la organización de las elecciones, en hacer respetar los resultados, aún si es necesario con desplazamiento de grupos militares; pero sobretodo con la formación de las fuerzas de seguridad pública que garanticen el orden y el mantenimiento de la democracia.

La estrategia no fue bien aceptada en las nacientes repúblicas y antes por el contrario, provocó el efecto opuesto con la instalación de dictaduras prolongadas.

Reseña histórica por países

Bolivia

Bolivia como se ha planteado anteriormente, es una república con una dotación de recursos naturales variados, especialmente productos mineros estratégicos para los países demandantes. En la colonia fue abastecedor de plata, en la república productor de estaño y últimamente abastecedor de gas natural para los países del Cono Sur.

Se identifica como un país con una economía eminentemente minera, con uso intensivo de mano de obra y con escasa articulación con los sectores no exportadores.

En 1921 Juan Bautista Saavedra fue elegido presidente con el sustento de un programa progresista, pero debe recurrir a la violencia para reprimir la huelga de los obreros de las minas en 1923.

En el periodo siguiente de 1926 a 1930, toma el gobierno Siles Reyes, quien busca favorecer a la población indígena, pero aún están vivas las heridas causadas por la Guerra del Pacífico y por definirse problemas territoriales en la región del Chaco con Paraguay. El presidente Eligio Ayala del Paraguay, dentro de sus proyectos tiene la colonización del desierto del Chaco, con el fin de proteger la soberanía de su país.

La Guerra del Chaco. Paraguay y Bolivia mantenían un resentimiento nacionalista. Paraguay desde la guerra de la Triple Alianza (1864–1870), en que perdió tierras a favor de Brasil y Argentina. Y Bolivia en la Guerra del Pacífico (1879–1883) en que perdió el acceso al mar. Quedaba pendiente la demarcación de límites en el Chaco, una vasta extensión plana de 600.000 km² bordeando los Andes desde la Amazonía a la Pampa.

La repartición del Chaco entre Bolivia y el Paraguay en 1913 parecía posible;

Bolivia había elevado reclamaciones ante las Naciones Unidas respecto a su acceso al Pacífico, que no fueron aceptadas. Al haber perdido esta opción de comunicación, contemplaba la posibilidad por medio del Chaco, mediante una comunicación fluvial, lograr la salida al Atlántico, situación que no compartía Paraguay. Algunas compañías petroleras informaron de la posible existencia de yacimientos de petróleo en el Chaco, aumentando el deseo de apropiación por los dos países.

Sin embargo, en el Archivo de Indias de Sevilla, fue obtenida por Bolivia una buena cantidad de títulos que comprobaban los derechos reclamados, pero que no fueron reconocidos por sus oponentes. (Sanabria, 1982).

El presidente electo en Bolivia en 1930, encuentra problemas sociales que atribuye a la propaganda comunista extranjera; para distraer los ánimos y poder manejar el problema, desvía la agitación social hacia la rivalidad con Paraguay.

Se llega al enfrentamiento entre los dos países, incurriendo Bolivia en grandes pérdidas. En 1935 Bolivia acepta una tregua y gracias al Tratado de Buenos Aires del 21 de julio de 1938, se firma el tratado de Paz, Amistad y Límites. El 10 de octubre del mismo año se fijaban los linderos entre los dos países. Paraguay recibe 225.000 kilómetros cuadrados del Chaco. (Dabène, 2001) (Sanabria, 1982).

La Segunda Guerra Mundial. Con la guerra, el estaño se transforma en un bien estratégico de primer orden, Bolivia exporta el mineral a los países aliados. Los dueños de las minas, conocidos como los barones del estaño, en nombre de la defensa de la democracia, someten a los trabajadores a jornadas extenuantes para poder atender la elevada demanda. “En 1942 las huelgas fueron reprimidas con verdaderas masacres” (Dabène, 2001, 75).

La revolución boliviana de 1952. Entre 1952 y 1964 Bolivia asumió un proceso excepcional en el ámbito latinoamericano; en un periodo relativamente corto había estado de actor en varios eventos que propiciaron la convulsión política, así como movilizaciones sociales. De una parte está el desempeño negativo en dos guerras: la del Pacífico y la del Chaco, donde el país salió afectado perdiendo más de la mitad de su territorio, lo que generó el desarrollo de un nacionalismo violento.

De otro lado, como se ha mencionado anteriormente, no obstante ser un país con buena dotación de recursos naturales, especialmente yacimientos de minerales, fueron explotados en forma de enclave económico; de manera que en el transcurso histórico la población no recibió los frutos de esos bienes de exportación, antes por el contrario Bolivia es considerada como una de las naciones más pobres de América

del Sur. El país parece no haber traspasado el siglo XIX, con una esperanza de vida al nacer de 40 años y una tasa de alfabetismo superior al 30%. Un alto porcentaje vive en el sector rural, concentrado en propiedades de minifundio, mientras en las grandes propiedades se mantienen prácticas de tipo feudal. (Dabène, 2001).

Con la presencia marcada de explotación, especialmente de los trabajadores en las minas, el partido MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) se fortalece, apoya las huelgas y protestas de la población.

En 1951 gana las elecciones el partido MNR, pero los militares no reconocen el triunfo; se presentan enfrentamientos tomando el poder en 1952 los representantes del MNR. Este hecho marca el inicio al periodo de doce años, que se conoce como la revolución boliviana, durante el cual gobernó Víctor Paz Estensoro de 1952–1956; Hernán Siles Zuazo de 1956–1960 y de nuevo Paz Estensoro de 1960–1964.

Durante este periodo las fuerzas armadas fueron prácticamente desmanteladas, quedando una mínima parte bajo control del MNR, mientras que el gobierno estaba respaldado por los 50.000 milicianos que lo llevaron al poder.

El gobierno de Paz Estensoro procedió a la nacionalización de las minas

de estaño el 31 de octubre de 1952, a la vez que se creó la Compañía Minera Boliviana COMIBOL. Bolivia había estado dependiendo de las exportaciones del estaño durante más de medio siglo. Con la pérdida de las influencias de la 'rosca' de las tres empresas multinacionales que controlaban la industria, se iba a presentar un tratamiento hostil a las exportaciones de COMIBOL y por ende una reducción en los ingresos provenientes de las exportaciones para Bolivia, así como las posibilidades de su crecimiento.

El 21 de julio de 1952 se adopta el sufragio universal y anuncia la participación de capas populares en el régimen revolucionario.

El MNR favorece la creación de sindicatos; el 17 de abril de 1952 aparece la Central Obrera Boliviana COB y el 15 de julio de 1953 se establece la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CNTCB, adscritos a la COB, con plena participación de la COB en el gobierno en varios ministerios. Igualmente se impulsa la reforma agraria siguiendo el paradigma de la mexicana. (Dabène, 2001).

Al igual que en Argentina o México los sindicatos se transforman en maquinarias fuertes, difícilmente controlables, cayendo en muchos casos en actitudes populistas y clientelistas. En Bolivia llegó a funcio-

nar el sindicalismo como una empresa de promoción social.

El 2 de agosto de 1953 se decreta la reforma agraria, inspirada en el artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917. Mediante el principio según el cual 'la tierra pertenece a aquel que la cultiva', se procede a la nacionalización de la tierra; cerca de diez millones de hectáreas fueron distribuidas a 200.000 familias, en desarrollo del artículo 78 del Decreto-ley del 2 de agosto de 1953, que dice: "Los campesinos que han estado sumidos a regímenes de trabajo feudal y a la explotación dentro de su condición de servidores, de obligados, de arrimados, de jornaleros, o de agregados, etc., que tengan más de dieciocho años, o que tengan más de catorce y estén casados, o viudas con hijos menores, son declarados a la fecha de promulgación de este decreto, propietarios de las parcelas de tierra que ellos han trabajado hasta el presente, que el Servicio Nacional de la reforma agraria les da, de forma racional, las tierras a aquellos que tienen derecho en virtud de la definición de la pequeña propiedad y que ellos reciben en compensación al uso colectivo de las tierras que les permiten cubrir el presupuesto familiar" (Dabène, 2001, 96), reservándose el gobierno, las tierras de los valles y las de mejor adecuación.

Para las elecciones de 1956, la situación económica no es la mejor, debido a los altos costos de la política redistributiva llevada a cabo. Es

elegido Hernán Siles Zuazo, quien debe aplicar un programa para solucionar los déficits. De otra parte aparecen divisiones al interior del MNR e inconformismo social que llevan al presidente elegido a recurrir a la fuerza para pacificar al país; igual situación debió asumir en su segundo mandato Paz Estensoro.

Al hacer un balance de la revolución, los resultados no son muy favorables: se había dado una reducción de cerca del 20% en el PNB por habitante, así como una caída en la producción. Hasta los beneficiarios de la reforma agraria se mostraban inconformes. Con la actuación clientelista se favoreció la corrupción y la ineficiencia que ayudó a la inestabilidad del proyecto revolucionario.

Durante el proceso revolucionario las fuerzas armadas se modernizaron y avanzaron mediante un movimiento de acercamiento al pueblo, logrando jefes populares como los generales Barrientos y Ovando. En las elecciones de 1964 se veía una nueva victoria de Paz Estensoro, con Barrientos como vicepresidente, quien el 4 de noviembre del mismo año asumió el poder, dando fin a los doce años del periodo de la revolución, e inaugurando el periodo de dieciocho años de poder militar.

El General René Barrientos Ortuño, fue un presidente popular, que hablaba el quechua; aunque no manejó el país

con mano de hierro, como ocurrió con otras dictaduras en América Latina, tuvo que imponer el estado de sitio en 1965 para disolver las milicias de los mineros y atacar la guerrilla. Barrientos muere en un accidente; en la decisión del sucesor surgen rivalidades dentro de las fuerzas armadas. El General Ovando ejerce la presidencia de septiembre de 1969 a octubre de 1970, luego toma el poder el General Juan José Torres González, quien gobierna de octubre de 1970 a agosto de 1971, hasta que finalmente el General Hugo Banzer se impone por la fuerza dando fin al militarismo reformista, lanzando represión contra la izquierda y los sectores estudiantiles.

Hasta los años setenta Bolivia seguía dependiendo del estaño, pero a partir de esta fecha comenzó a exportar gas natural en grandes cantidades especialmente a los países del Cono Sur. En el proceso de recuperación de las exportaciones, en los años sesenta, se había dado la modernización de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), con la ayuda técnica de Estados Unidos y Alemania Occidental, transformándose en una gigantesca empresa de propiedad del Estado, responsable de las exportaciones de las minas nacionalizadas. (Bulmer-Thomas, 1998).

El General Banzer considera que se debe iniciar una apertura política; con tal fin programa elecciones para julio

de 1978. El 9 de julio de 1978 el General Pereda recibe el 50% de los votos, que indica la poca aceptación de los militares. El 21 de julio Pereda se toma el poder mediante un golpe de estado. Cuatro meses después es derrocado por el General Padilla, quien promete elecciones para 1979, siendo cada vez más difícil la transición a la democracia. (Dabène, 2001).

El 29 de julio de 1980 efectúa una elección con resultados ambiguos, la respuesta se da con un golpe militar, esta vez en cabeza del General García Meza quien ejerce el gobierno por dos años. El 5 de octubre de 1982, los militares deciden retirarse y el Congreso designa como presidente a Hernán Siles Zuazo.

En América Latina un grupo de países, entre estos Bolivia adoptaron la estrategia de liberalización comercial. En agosto de 1985 se pone en marcha un plan de estabilización y control de la inflación, e igualmente adopta un arancel uniforme único con dispersión cero.

El ajuste externo ocasionó recorte de las importaciones y recesión interna, afectando el ingreso del Estado. La recesión aumentó la informalización de la economía, llevando incluso a sectores de la economía formal hacia la informalidad, incidiendo en la reducción de ingresos provenientes de los impuestos tanto directos como

indirectos. “A finales de 1984 Bolivia solo podía cubrir el 2% de los gastos gubernamentales con ingresos fiscales y la tasa de inflación de 1985 superó el 8.000%” (Bulmer- Thomas, 1998, 454).

Para la solución de los problemas anteriores era necesaria una reforma fiscal; una propuesta inmediata fue la aplicación de un impuesto al valor agregado con el mayor cubrimiento de bienes y servicios. Bolivia inició la aplicación del IVA en 1987, a la vez que se reducían los impuestos directos a empresas y personas.

La hiperinflación se detuvo en seco en 1985 con la aplicación de un programa de congelación de salarios, reforma a fondo del sistema fiscal y el establecimiento de un mercado libre de divisas.

Colombia

Las primeras décadas del siglo XX, conocida como la república conservadora, están marcadas por signos de inconformidad, especialmente por los trabajadores de las bananeras de propiedad de empresas extranjeras, sin que aparezca ninguna fuerza por parte del Estado como mediadora, antes por el contrario se aplica la represión. Incluso se dan algunas leyes que restringen el derecho de huelga.

En 1930 llega el partido liberal al poder, luego de cincuenta años de

permanencia del partido conservador. El partido conservador había tenido durante este largo periodo como aliados a la iglesia y los militares; los liberales como oposición buscan su apoyo en las clases populares.

De 1930 a 1934 ejerce el gobierno Enrique Olaya Herrera y de 1938 a 1942 Eduardo Santos, conocidos como liberales moderados.

La revolución en marcha

Para el periodo de 1934–1938 es elegido el liberal radical Alfonso López Pumarejo, con el programa de gobierno denominado ‘la revolución en marcha’ en la que establece que el Estado debe ser árbitro en los conflictos sociales. Igualmente facilita las condiciones para que se establezcan sindicatos. “Entre 1935 y 1939, 155 de los 218 conflictos registrados fueron arreglados con la mediación del Estado. Algunas huelgas, como en diciembre de 1935 en la Tropical Oil Company, significaron un alto valor simbólico, a raíz de que el gobierno logró obtener de las grandes empresas norteamericanas, beneficios para los obreros” (Dabène, 2001, 63).

Mediante los aranceles y los impuestos establecidos a las exportaciones, el país en 1935 recibía cerca del 45% de sus ingresos por el cobro de estos conceptos, correspondiendo a la afirmación: que los países para éste periodo tienen una alta dependencia

del sector externo, no sólo por la colocación de los bienes en el mercado, sino por los recursos tributarios recaudados. (Bejarano, 1988a).

Se agudizaron los problemas sociales y económicos; con pugnas entre campesinos y terratenientes, la presencia de una producción escasa, con fortalecimiento del monopolio de la tierra, lo que lleva en general a la existencia de un mercado agrario limitado. Estos hechos terminan por tener un impacto en la economía nacional, los cuales conducen a una solución radical mediante la ley 200 de 1936, en la cual se establecía un plazo de diez años para explotar las tierras según la racionalidad capitalista; se daba por terminada la condición de aparceros, arrendatarios y en general todas las formas de trabajo dadas bajo condiciones de servidumbre. Con la ley de tierras se instauró el trabajo asalariado; en cierta forma fue un paso obligado de una relación de tipo feudal a formas de explotación capitalista en el sector rural.

Con la Ley 200 de 1936 y normas que se venían dando desde 1925, los grandes latifundistas optaron por vender parte de sus propiedades, cambiando el panorama del latifundismo en Colombia, “hasta 1925, cuando se conformaron latifundios de cincuenta mil, cien mil y hasta un millón de hectáreas, y la

segunda de 1925 en adelante, cuando los latifundios se reducen a mil, cinco mil y diez mil hectáreas, cambio profundo de estructura que es un reflejo del desarrollo capitalista del país” (Kalmanovitz, 1999, 343).

En 1936 se creó la Confederación única de Trabajadores CTC. Antes de 1930 estaban 99 sindicatos reconocidos, que respondían a sociedades mutuales. “Entre 1930 y 1945 se reconocieron 1400 sindicatos, de estos 644 entre 1944–1945. Estas cifras son exageradas frente al tamaño de la industria nacional, pero refleja claramente la tentativa de los liberales colombianos de seducir la clase obrera naciente” (Dabène, 2001, 63).

Al reconocer el gobierno de López Pumarejo el derecho de la organización sindical, estaba creando canales de negociación en la resolución de conflictos obrero-patronales, en aras de que la creciente productividad industrial permitiera reconocer un salario real mayor; justificada en que un mayor poder de compra tendría efecto positivo sobre el mercado interno y por ende en el mayor desarrollo del sector industrial. (Kalmanovitz, 1999).

En el periodo comprendido entre 1939 y 1945 se da la consolidación de la industria como el sector dinámico de la economía. En 1931 se había establecido una política arancelaria que orientó la producción hacia

sectores sustitutivos de importación, primero en el sector de alimentos: azúcar, arroz, cacao; luego se dio la ampliación hacia la transformación de productos agropecuarios, textiles, bebidas y cueros, aportando para el periodo el 68,4% del total del crecimiento. La industria química, con la excepción de productos básicos, así como la mecánica eran inexistentes. (Bejarano, 1988).

La Ley 200 había cumplido un papel importante, no sólo el de haber incidido sobre los dueños de los grandes latifundios, que fueron motivados a explotar estas propiedades en forma de empresas capitalistas, sino que ayudó con argumentos jurídicos para clarificar derechos de propiedad. La carencia de títulos de propiedad no permitía tener acceso al crédito, a la vez que impedía el desarrollo de un mercado de tierras. Pero también significó efectos negativos, ya que muchos de los propietarios de latifundios desalojaron a los aparceros y a arrendatarios; en la norma no se planteaban soluciones sociales para ellos, fuera de la de transformarse en asalariados. A la inmediata aplicación de la norma se presentó una reducción en el área cultivada, afectando la oferta de alimentos y sus precios.

Para corregir este problema que había tenido repercusiones macroeconómicas, se expidió la ley 100 de 1944 o ley de aparcería, que reglamentó la condición de aparcerero y

garantizó a los propietarios la pertenencia de la tierra.

La segunda administración de López Pumarejo (1942–1945), coincidió con el desarrollo de la segunda guerra mundial. En 1944 soporta un golpe militar fallido, apoyado por los conservadores.

La violencia en Colombia

En el debate de 1946, los liberales llegaron divididos, lo que permite al candidato conservador Mariano Ospina Pérez ganar las elecciones. Se inicia un proceso de persecución contra los liberales, generándose un proceso denominado ‘la época de la violencia’, que se agudizó con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

Como una forma de división del sindicalismo en Colombia, bajo este gobierno se crea la UTC, Unión de Trabajadores de Colombia de filiación conservadora, por ende identificando la CTC, (Confederación de Trabajadores de Colombia), como liberal.

La inversión extranjera a partir de los años cincuenta se orienta hacia el sector manufacturero, de preferencia en la producción de bienes intermedios como papel, caucho, productos químicos, amparados en las políticas arancelarias que tenían como objetivo el desarrollo de la producción nacional, perdiendo relativa importancia los sectores extractivos.

En la medida que el sector industrial se vincula en la transformación de materias primas provenientes de la agricultura comercial, se amplían las diferencias entre ésta y la agricultura tradicional, que a más de ubicarse en las tierras de vertiente, no se vislumbran posibilidades de acceder a la tecnificación y modernización.

En 1953 se toma el poder el General Gustavo Rojas Pinilla, con el acuerdo de los partidos políticos; su gobierno persigue la pacificación del país, sin embargo en los campos se amplía la violencia. En el ejercicio del gobierno, el General Rojas eliminó algunas de las políticas que causaban el malestar social, pero se continuó con la aplicación del liberalismo económico, estimulando las exportaciones, garantizando la libre inversión, así como la protección a la industria y al sector cafetero. Por el temor al populismo que despertaba la dictadura, entró en contradicción con los sectores que lo habían apoyado, especialmente con la iglesia; siendo retirado del gobierno por otro golpe militar y entregado el poder a los civiles.

El Frente Nacional. Con el fin de retomar el gobierno, los dirigentes de los partidos políticos acordaron en 1957 una modalidad de gobierno: el Frente Nacional. Durante dieciséis años los dos partidos se alternan en el poder, asignando los cargos públicos en estricta proporción. Esta modalidad

fue aprobada mediante un plebiscito en diciembre de 1957, poniéndose en marcha al año siguiente. Se restablece la democracia, pero es una democracia denominada limitada, es decir no da cabida a otros partidos políticos. (Dabène, 2001).

El gobierno fue ejercido en estricto orden, primero por el liberal Alberto Lleras Camargo de 1958–1962; luego por el conservador Guillermo León Valencia de 1962–1966; el liberal Carlos Lleras Restrepo de 1966–1970 y el conservador Misael Pastrana Borrero de 1970 a 1974.

Para poder contar con el apoyo de la población y por tanto la legitimidad con el voto, los gobiernos del Frente Nacional se vieron obligados a llevar a cabo reformas sociales, económicas y políticas. En el gobierno de Rojas se le había dado la condición de ciudadana a la mujer y en el Frente Nacional se le concedió el derecho del voto.

El sindicalismo volvió a lograr representación, llevándose a cabo negociaciones colectivas, mejoramientos salariales, con una menor participación de los sindicatos patronales, aunque siempre estuvieron representados en los gremios.

En el comercio internacional se dio un manejo racional de las divisas, con el control de cambios; se establecieron listas de prohibida importación y de licencia previa por medio de aranceles

altos. El Estado fue vigilante del endeudamiento privado externo. En general se dio una mayor intervención del Estado, amparado en los postulados keynesianos.

Los gobiernos eran asesorados por la CEPAL, pero a la vez mantenían mayor contacto e influencia con los técnicos del Banco Mundial y la AID.

En el gobierno de Lleras Camargo, Colombia sirvió de vitrina para el desarrollo del programa la Alianza para el Progreso. El proceso de pacificación se venía aplicando, con algunos resultados favorables fruto igualmente de programas sociales. La conveniencia de la reforma agraria se venía trabajando desde 1959, plasmada en la Ley 135 de 1961, con repartición de tierras, sin afectar a los terratenientes.

El Estado tenía pocas fuentes de ingreso y las clases pudientes se mostraban reacias a ser afectadas por políticas fiscales. Para suplir esta deficiencia se instauró el impuesto a las ventas, que afecta en mayor medida a la población de menores ingresos. Para poder responder al gasto público el Estado recurrió al endeudamiento externo, que para 1970 era cerca del 30% del PIB, en el momento representaba tres veces los ingresos anuales por exportación. (Kalmanovitz, 1999).

Colombia junto con Argentina, Brasil, México, Haití y República

Dominicana, siguieron la estrategia de la promoción de las exportaciones a partir de los sesenta, contrario a la gran mayoría de países de América Latina que se dedicaron sólo a la sustitución de importaciones para el abastecimiento del mercado interno. (Bulmer-Thomas, 1998).

En los años sesenta se presenta una gran inestabilidad monetaria. Era necesario establecer un sistema financiero con bajos tipos de interés, para poder orientar los créditos de fomento hacia las industrias que participaban en el proceso de sustitución de importaciones. Para dar cumplimiento a esta política, la Junta Monetaria (creada en 1963), se encarga del control monetario.

Se dieron dos drásticas devaluaciones, una en 1963 y la otra en 1965, con la supervisión del FMI. En 1967 se presentó una situación parecida, pero el presidente Lleras Restrepo se negó a devaluar, con una enérgica denuncia pública, sobre las imposiciones a que se le quería someter.

Para llevar a cabo la devaluación requerida, el manejo cambiario y otros temas relacionados, en el gobierno de Lleras Restrepo se aprobó el Decreto-Ley 444 de 1967. El éxito de ésta norma se dio en la introducción de una devaluación gradual de la tasa flexible de cambio (*crawling peg*), que además controló y evitó la llegada de

capitales especulativos, o movimientos de mercancías orientados con el mismo propósito.

En aras de lograr la competitividad internacional, se busca la reducción de los costos laborales mediante la modificación de la legislación laboral. En tal sentido se limitó el periodo de huelga en las empresas privadas, generando un proceso de enfrentamiento entre el trabajo y el capital, teniendo éste mayor respaldo por parte del Estado.

De la aplicación de tales políticas, tanto obreros como empleados experimentaron una baja en los salarios reales, fenómeno que se extiende a todo lo largo de la década de los setenta; mientras que los dueños del capital, como contrapartida lograron incrementar la acumulación de capital, que a su vez engendró mayores brotes de violencia. (Kalmanovitz, 1999).

En los inicios de la década de los setenta se ampliaron las exportaciones de manufacturas y de productos agropecuarios, pero a la vez fueron acompañadas de una bonanza cafetera de 1976 a 1978, así como del ingreso masivo de divisas por efecto del narcotráfico, que ocasionaron una depreciación del peso; con el abarataamiento de las importaciones y el encarecimiento de las exportaciones se afectó el sector manufacturero, presentándose una desindustrialización.

El periodo de gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970- 1974) se llevó a cabo, en parte, bajo la orientación de Lauchlin Currie, con el plan de desarrollo del gobierno conocido como “las cuatro estrategias”. Una estrategia era incentivar la construcción de vivienda, con una propuesta de financiación de valor constante, la UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante), que ofrecía estímulo a los ahorradores a la vez que garantizaba recursos para la inversión.

Efectivamente se dinamizó la construcción, pero no cumplió a plena capacidad el objetivo de arrastre sobre el resto de la economía como lo había planteado Currie años atrás. “Según éste (Currie), una economía caracterizada por la utilización parcial de los hombres y los equipos, y con trabas tan inmensas a su utilización plena, tales como la organización sindical, el exceso de feriados y los sobresalarios para el trabajo nocturno, sólo podía desarrollarse en forma acelerada al impulso de un sector de punta que empleara intensivamente a los trabajadores con salarios más bajos y que, al eliminar las barricadas, arrastraría al resto de la economía” (Kalmanovitz, 1999, 458).

Sin embargo no hay que olvidar que la economía colombiana se mueve dentro de un engranaje internacional. Los resultados expansivos de comienzos de la década de los sesenta y de comienzos de los setenta, como la recesión de 1974, explican no sólo el

comportamiento global de la economía, sino la incidencia de esta en los gobiernos a la hora de aplicar individualmente políticas para desarrollar una actividad en particular, más sí no responde a los acontecimientos globales.

En el auge de los petrodólares, los bancos en su afán de colocación de créditos mostraban prelación por los países grandes: México, Brasil, Argentina, Colombia. “Sin embargo, sus esfuerzos por prestarle a Colombia fueron en gran parte rechazados debido a la larga tradición conservadora de la república en asuntos fiscales hasta que llegó el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978–1982). Todavía a finales de 1982 más de la mitad de la deuda de Colombia era para con el Banco Mundial y otros acreedores oficiales” (Bulmer-Thomas, 1998, 420).

Los cuatro gobiernos del Frente Nacional aplicaron el intervencionismo de estado, siguiendo las recomendaciones de la CEPAL, pero igualmente estaban presentes y eran acatadas las recomendaciones impartidas por el FMI, de corte monetarista.

Los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974–1978) y Julio César Turbay Ayala (1978–1982) fueron partidarios de la aplicación del modelo monetarista, sin embargo los resultados no tuvieron correspondencia con la predicción de la teoría.

El mercado externo no pudo actuar libremente, de una parte estaban los compromisos con el Pacto Andino que exigía un arancel externo mínimo y de otra, se estaba impulsando el comercio intra-regional.

De la aplicación del modelo monetarista se presentaron algunos efectos positivos como la eliminación de listas de prohibida importación y gran cantidad de bienes pasaron a ser de libre importación; los aranceles promedios que en 1970 eran de 70%, después de 1974 pasaron a ser del 33%. (Kalmanovitz, 1999).

En el gobierno de López se adoptó la experiencia del UPAC al resto del sistema financiero, de tal forma que se dieron los resultados esperados, los tipos de interés se fueron elevando en la medida que se escaseó el dinero. Empiezan a tener importancia los denominados cuasidineros (UPAC, cuentas de ahorro, depósitos a términos, bonos y títulos de participación), que constituyen el ahorro del público. En los medios académicos se defendía, que si el sistema financiero se soportaba sobre el ahorro del público, se daría menor inflación que cuando el sistema llevaba a cabo emisiones de dinero. El gasto público igualmente se financia con préstamos en el mercado privado de capitales. El resultado final fue una elevación desmedida de las tasas de interés, y sin embargo, contrario a lo esperado, se presentaron las tasas de inflación más al-

tas entre 1974 y 1982. (Kalmanovitz, 1999).

La política tributaria establecida bajo la concepción neoliberal, considera que los capitales no se deben desestimular con impuestos directos, de otra parte los subsidios se deben eliminar y las tarifas no sólo deben ser costeables, sino que deben permitir futuras ampliaciones. Los ingresos del Estado deben estar soportados en los impuestos indirectos; por esta razón se considera la política tributaria neoliberal la más regresiva. "Según las Cuentas Nacionales del Banco de la República, los impuestos directos desembolsados por las sociedades de capital pasaron del 3,1% del PIB en 1970 al 1,9% en 1979, proceso que revela muy bien los objetivos de la tributación neoliberal" (Kalmanovitz, 1999, 489).

Durante los años de gobierno de Turbay Ayala, las exportaciones nuevas pierden vigencia, se da una recuperación de las exportaciones del café, debido a la reducción de oferta de Brasil que perdió parte de la cosecha por las heladas. Prevalece el lavado de dólares, producto de las exportaciones ilícitas.

Ecuador

Dentro de la Real Audiencia de Quito se distinguían dos zonas: la costa y la serranía. En las costas se inició el cultivo de cacao para la exportación, lo que determinó la ubicación de un

gran porcentaje de la población allí, mientras la serranía, es dedicada a la producción de bienes para el consumo interno, remarcando la situación del bajo grado de intercomunicación entre las regiones.

El poder económico terminó en manos de los latifundistas que funcionaban como verdaderos feudos, llevando a contradicciones en términos del equilibrio del poder entre los gobernantes metropolitanos, ya que éstos sólo controlaban el poder político.

En las primeras dos décadas del siglo XIX se dieron varios enfrentamientos en la búsqueda de la independencia, pero al no existir mayor comunicación entre las regiones, fueron logrando la independencia por zonas. Con la independencia Guayaquil y Quito quedaron anexadas a Colombia, dentro del proyecto de la Gran Colombia. En 1830 forman una República Independiente integrando la provincia de Cuenca.

El nuevo país seguía integrado por las tres regiones naturales, de acuerdo a lo establecido desde la colonia: la Sierra Centro-Norte, con Quito como la ciudad principal, en donde se concentró la mayoría de la población, con predominio del sistema de hacienda; la Sierra Sur, con la ciudad central de Cuenca, caracterizada por la pequeña propiedad y producción artesanal y la Cuenca del río Guayas,

con su centro Guayaquil, con propiedades tipo latifundio vinculadas a la exportación. Como particularidad es de anotar que entre las tres regiones las relaciones eran casi inexistentes, no se daba un mercado que las articulara, cada una se vinculaba económicamente con las regiones vecinas, con el sur de Colombia, o con el norte del Perú y con la costa Pacífica.

A partir de 1880, con el auge exportador del cacao, el capitalismo comienza a ser la forma de producción dominante. La bonanza exportadora de cacao va hasta las dos primeras décadas del siglo XX, lográndose una mayor integración entre las regiones por la construcción de obras de infraestructura, sin embargo, el modelo primario exportador entra en crisis, por la presencia de cultivos sustitutos en otros países con mayor productividad y cercanía a los mercados.

Ecuador ha tenido como particularidad, que en la medida que un bien pierde vigencia en el mercado internacional, llegan nuevos bienes con igual o mayor aceptación; es así como en los cuarenta se inicia el auge bananero y en los setenta aparece con una amplia participación en la exportación de petróleo.

En la elección de los miembros del Congreso y de los órganos de gobierno, sólo podían participar los notables

propietarios, quedando excluidos las mujeres, los indígenas y los desposeídos. Los elegidos justificaban este derecho en un don divino, sustentado en el apoyo de la iglesia, por lo tanto el denominado modelo liberal-democrático-republicano era sólo de nombre, pues la mayoría de la población estaba excluida en la conformación del gobierno.

Desde el nacimiento de la República aparecieron o se reforzaron las prácticas de discriminación racial, especialmente de los criollos hacia los mestizos y los indígenas, así como la limitación a la participación de la mujer; sus gobernantes mantenían la herencia de corte aristocrático.

Aunque se han logrado avances, no se ha podido entender que hay una realidad plurinacional que es la que conforma al Ecuador, lo que significa que es necesario reconocer la diversidad dentro del marco del Estado. (Ayala, 1999).

En 1906 se dio la Constitución denominada la Carta Magna Liberal; una de las transformaciones implantadas allí fue la separación de la iglesia y el Estado, llevando a cabo educación laica, libertad de conciencia y de culto, además a la iglesia se le retiraron varios bienes por medio de la ley de manos muertas.

Se concluyó la construcción del ferrocarril Transandino en 1911,

igualmente se había construido el tramo de ferrocarril Guayaquil-Quito, que permitía la integración de las regiones y de los mercados, uno de los problemas permanentes de Ecuador.

A partir del establecimiento del Estado laico, la demanda por los derechos de los diversos grupos se acrecentaba, siendo una de las motivaciones para la conformación de los partidos políticos: “La asamblea reunida en 1923 estructuró a nivel nacional el Partido Liberal Radical. La convención convocada para 1925 reconstituyó el Partido Conservador Ecuatoriano. En 1926 se fundó el Partido Socialista Ecuatoriano, que sufrió una primera división cuando el sector pro-estalinista constituyó en 1931 el Partido Comunista Ecuatoriano” (Ayala, 1999, 37).

Desde los años veinte, el partido socialista tenía bastante influencia en el campo cultural, ideológico y gremial productivo. En 1938 se instituyó la CEDOC, primera central nacional de trabajadores y en 1944 se formaría la CTE, Central de Trabajadores de Ecuador.

Isidro Ayora se toma el poder en 1926 y luego en 1928 fue nombrado presidente constitucional, realizó varias reformas por medio de la Constituyente de 1928, como la de haber concedido a la mujer el derecho al voto. Fue depuesto del gobierno, dejando al país

en un nivel de inestabilidad, con la presencia de enfrentamientos entre los políticos de la Sierra con los de Guayaquil, con denuncias de situaciones de fraude electoral, favoreciendo el denominado golpe parlamentario, con José María Velasco Ibarra.

En 1934 Velasco Ibarra llega a la presidencia, desarrollando un gobierno con marcada presencia caudillista, movilizandopoblación de las capas medias y populares, pero en el ejercicio del poder actúa en condiciones de un gobierno dictatorial, situación que lo llevó a ser relevado de sus funciones en 1935 por los militares.

En 1941 Ecuador fue invadido por tropas peruanas, que ante la carencia de recursos para hacer frente al ejercito invasor, resultó vencido. Mediante un protocolo en Río de Janeiro en enero de 1942, Ecuador cede la mitad de las tierras que había reclamado históricamente. Arroyo no pudo contener las reacciones populares y en 1944 se toma el poder por segunda vez, Velasco Ibarra, quien aglutina a los grupos inconformes, sin embargo el político se identifica con la derecha, ejerciendo nuevamente un gobierno dictatorial. Se convoca a una nueva Constituyente en 1946, en la que es nuevamente derrocado; el país se mantiene dentro de una inestabilidad política, siendo asumido el gobierno en cortos periodos por otros gobernantes.

Aparece el nuevo producto de exportación: el banano, se preparan tierras para adecuarlas a su cultivo, ampliando la frontera agrícola, que a la vez permite la vinculación de muchos grupos de población, con un efecto positivo, como fue la elevación de los salarios de la clase trabajadora. En la mayoría de los casos, la búsqueda de las nuevas tierras las llevaron a cabo compañías extranjeras, que tenían preferencia por aquellos sectores dinámicos, en otras palabras bienes con gran aceptación en el mercado internacional. Para 1960, Ecuador controlaba más de la cuarta parte de las exportaciones mundiales de banano. (Bulmer-Thomas, 1998).

Superadas las crisis políticas de las décadas anteriores y la prosperidad que se vislumbraba con el nuevo producto de exportación, se fue conformando una burguesía que permitía participación a los diversos grupos, generando el convencimiento de una madurez democrática.

Galo Plaza ejerció el gobierno de (1948- 1952), buscando la modernización del aparato del Estado y la readecuación de la economía. Velasco Ibarra gobierna por tercera vez (1952- 1956), y logra un mejoramiento en la infraestructura vial y en el sector educativo, sin haber podido realizar las reformas prometidas a sus electores. Camilo Ponce (1956-1960) representante de la derecha, pero obligado a actuar acorde a los

lineamientos liberales, tuvo que enfrentar conflictos sociales derivados de los escasos logros en el bienestar de la población.

En las elecciones de 1960 Velasco Ibarra explotó los sentimientos anti-imperialistas, logrando la victoria, pero en 1961 fue derrocado, ejerciendo el gobierno el vicepresidente Carlos Julio Arosemena (1961-1963) quien intenta sofocar los ánimos exaltados por Velasco; es depuesto por los militares, iniciándose el camino a una nueva dictadura.

Gobierna la Junta militar (1963-1966), bajo los principios estadounidenses del temor a la llegada del comunismo y el peligro que significaba la revolución cubana, mediante un programa de modernización especialmente dirigido hacia los sectores tradicionales, para poder responder a las condiciones del capitalismo moderno. En 1967, en la provincia oriental se descubren yacimientos de petróleo como un buen augurio para el desarrollo del país. (Dabène, 2001).

Luego de un corto periodo de gobierno civil, lo asumen nuevamente los militares con el General Rodríguez Lara, en el momento en que aparece el auge exportador del petróleo, coincidiendo con la presencia de los precios altos. El país se encuentra en un momento de prosperidad con altos ingresos, que son dedicados en gran proporción a la modernización y

algunos otros dedicados a gastos superfluos.

El gobierno de turno desempeñó un papel importante al defender la soberanía nacional sobre sus recursos naturales. Ecuador entró en la OPEP y controla las compañías petroleras extranjeras por medio de la Corporación Estatal del Petróleo Ecuatoriano CEPE. Sin embargo, los excedentes logrados por los altos precios del petróleo no tienen ningún efecto redistributivo sobre la población y en respuesta por el contrario, ocasionan malestar social y enfrentamientos. Problemas que se agudizan en 1975, cuando el precio del petróleo cae. Ecuador nacionaliza la producción de petróleo en 1976. (Dabène, 2001).

El petróleo para el país era considerado el motor de desarrollo, pero se estaba gestando desde tiempo atrás un problema social, pues mientras el PIB real aumentó a un ritmo anual de 9,7% entre 1970 y 1980, el PIB per cápita sólo logró tasas de crecimiento del 6.5%. El gobierno militar había venido aplazando las reformas fiscales y sociales necesarias. De otra parte, se dio una sobrevaluación de la moneda nacional, anulando a los demás sectores exportadores. (Bulmer-Thomas, 1998).

Para ejercer el gobierno es elegido el binomio Jaime Roldós-Osvaldo Hurtado, (1979-1984). Al llegar a esta

nueva etapa de gobierno en Ecuador se habían presentado cambios en la estructura; ahora la población estaba ubicada en las zonas urbanas, particularmente en la zona costera; el capitalismo había penetrado en todos los campos de la actividad de la sociedad; se había logrado un proceso de consolidación de las centrales obreras dentro del FUT, Frente Unido de Trabajadores, principal promotor de las movilizaciones; los partidos políticos tomaron nuevos matices: Democracia Popular e Izquierda Democrática.

Con la muerte de Roldós en 1981, toma el gobierno el vicepresidente Osvaldo Hurtado. En 1982 cambia de signo el auge petrolero, mientras el país elevaba su gasto público y era afectado por desastres naturales. Llevó a cabo los programas de ajuste impuestos por FMI, renegoció la deuda externa y llevó a cabo un cambio de moneda con resultados negativos, provocando protestas.

Asume el gobierno León Febres Cordero, (1984–1988), quien aplicó en su ejercicio medidas de corte neoliberal, que favorecieron fundamentalmente a los exportadores. Se dio una apertura al capital extranjero, que se transformó en capital especulativo, afectando los precios nacionales, con elevaciones en el costo de vida. En 1987 un terremoto dañó las instalaciones del oleoducto, que afectó aún más la economía; esta catástrofe llevó a suspender las

exportaciones de petróleo durante seis meses.

Para el periodo (1988–1992), llega al gobierno el candidato de izquierda democrática Rodrigo Borja. Este partido logra el control además del ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema y los organismos de control. El gobierno no puede cumplir plenamente las promesas, y en forma gradualista aplica las políticas económicas, sin embargo se mantienen los problemas de deuda externa y elevación del costo de vida. Entre los logros está el arreglo pacífico de los límites territoriales con el Perú en 1992.

En 1992, recobra el gobierno la derecha con Sixto Durán Ballen, quien se encargó de continuar con la aplicación del modelo neoliberal, con medidas orientadas para la reducción del tamaño del Estado, reducción de la inflación, eliminación de subsidios; el precio de la gasolina logró los niveles internacionales.

En 1995 nuevamente el Perú movilizó tropas a los límites en la Amazonía; Ecuador hizo respetar el Acuerdo vigente de Río de Janeiro, sellando el conflicto con un acuerdo de paz y arreglo definitivo.

Las fuerzas vivas convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente en 1997, mediante la cual se llevó a cabo una reforma amplia a la Constitución

de 1978. Entre los aspectos que se modificaron: limitación de la representación política, se reconoce la diversidad del país, sobre los derechos de los indígenas, las mujeres y los niños, a la vez que se concede la ciudadanía a todos los ecuatorianos. Entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, fecha de posesión del nuevo presidente: Jamil Mahuad, quien siguió la línea de ajuste económico de los gobiernos anteriores.

Perú

Con la Guerra del Pacífico (1879–1883) Bolivia y Perú pierden parte de su territorio, una parte desértica, rica en minerales: el desierto de Atacama, que pasó a formar parte de Chile. Perú se beneficiaba ampliamente de la explotación de minerales, pero luego de la guerra toma la alternativa de diversificar su producción, aprovechando la variedad de climas y de tierras.

En 1919 llega al poder Augusto Bernardino Leguía, con orientación populista, actuando en el gobierno de forma dictatorial durante once años. Afrontó las protestas estudiantiles a partir de 1924 de la Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA, que orientaba Víctor Haya de la Torre. El dirigente estudiantil en 1928 escribe el libro “El antiimperialismo y el APRA” y en el mismo año el líder comunista José Carlos Mariátegui escribe “Siete ensayos de interpreta-

ción de la realidad peruana”; estas condiciones representan una amenaza por la presencia de los obreros y las capas medias que apoyan la dictadura progresista.

Durante el periodo de la segunda guerra mundial, el presidente Manuel Prado, logró una situación de calma política, manteniendo una actitud de conciliación con el partido de oposición APRA. En 1945 es elegido presidente José Luis Bustamante, quien contó con el apoyo del APRA; fue un periodo de reformismos que finalmente la oligarquía no compartía, rompiéndose la alianza, declarando nuevamente al partido de Haya de la Torre como ilegal.

Los militares se toman el poder en 1948, con el General Manuel Odría a la cabeza. Este golpe fue apoyado por los ricos agricultores de caña de azúcar. El General Odría en el campo económico marca el inicio de dos décadas de desarrollo basado en las exportaciones, inicialmente como monoexportador de azúcar.

Con la declaración de ilegalidad del APRA y con el nuevo golpe de estado, Víctor Haya de la Torre se exilió durante cinco años en la embajada de Colombia. En 1950 se realizan elecciones y el General Odría en una elección no muy concurrida es elegido para un periodo de seis años. Fijándose como tarea la dirigencia del Perú, el impedir que llegue el APRA al poder.

En el gobierno de Manuel Prado en 1956, se legaliza el partido comunista y el APRA; en cuanto al programa económico no se presentan mayores diferencias con el anterior gobierno.

En las elecciones de 1962, participan como candidatos el fundador del APRA, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Odría. Haya de la Torre obtuvo el 33% de la votación, con un parlamento integrado mayoritariamente por el APRA, que lo llevan a la designación de la presidencia. Los militares impiden la posesión por considerar que las elecciones no garantizan suficiente apoyo al candidato, convocando a la realización de nuevas elecciones en 1963; esta vez gana Belaúnde Terry, quien logra el apoyo tanto de los militares, como de los nacionalistas y progresistas.

Con la difusión de las ideas comunistas y la admiración que despertó en toda Latinoamérica el Ché Guevara, se instaló un foco de propagación de la idea revolucionaria, generándose un grupo de seguidores que conformaron la guerrilla rural. Una fracción de las fuerzas militares se sensibiliza y ve la necesidad de llevar a cabo reformas en el país; las condiciones se ilustran en la siguiente cita: “Para 1968 se hallaban bajo control extranjero las tres cuartas partes del sector minero, las dos terceras partes de la industria azucarera y la mitad de las industrias de la pesca y de la elaboración de algodón y lana, además de aproximadamente el 60% de

los recursos y del crédito del sistema bancario. El capital extranjero controlaba también un tercio de la industria manufacturera (dos terceras partes de las 200 firmas mayores) y dominaba las empresas relacionadas con las comunicaciones, la generación de energía y el comercio. El perfil de los Estados Unidos era particularmente elevado, pues sus firmas nacionales representaban más del 80% de todas las inversiones extranjeras directas” (CEPAL, Devlin Robert. 1979, citado por Pinto y Assael, 1981, 9).

La desigualdad económica era acentuada en todos los sectores; si se mira en términos de la propiedad de la tierra, se tiene que a la fecha, los predios de más de 500 hectáreas están en poder de sólo el 1% de la población, que controlan el 74% de la superficie de la tierra. Los predios de menos de cinco hectáreas pertenecían al 82% de la población y sólo controlaban el 16% de las tierras, reportando un acentuado minifundio, que en muchos casos sólo garantizaba condiciones de subsistencia.

Las razones de preocupación por parte de los militares reformistas era la existencia de una distribución desproporcionada, donde el 50% de la población apenas recibía el 11,6% de los ingresos, mientras el 5% más pudiente tomaba el 40%, hechos bastante remarcables en la existencia de la inequidad en la distribución del ingreso. (Pinto y Assael, 1981).

La revolución social liderada por los militares. El 3 octubre de 1968 se da un golpe reformista con el apoyo de los Estados Unidos. En la formación militar durante los años cincuenta y sesenta se había impartido la doctrina de 'progreso social y desarrollo integral' que estaba altamente influida por las ideas de la CEPAL, las teorías de la dependencia y el subdesarrollo. En la academia militar Centro de Altos Estudios Militares CAEM, a la que además asistían militares de otros países de América Latina para su formación, estaba especialmente orientada al campo de la seguridad nacional, no sólo en el campo militar, sino también económico y social.

La presencia de las empresas multinacionales en la región era bastante acentuada, siendo responsables de cerca del 30% de la producción en América Latina, pero en Brasil, Colombia y Perú llegaba a más del 40%, condición que justificaba aún más la inconformidad.

Asume el poder el General Velasco Alvarado, quien tiene condiciones de líder y político. A los pocos días de haber tomado el gobierno nacionaliza la International Petroleum Company IPC, pone en marcha una reforma al aparato del Estado, al igual que una reforma agraria, llevando a cabo expropiaciones a los grandes propietarios extranjeros; el gobierno declara que las políticas que se desarrollarán serán aquellas que respondan a los intereses nacionales.

Las políticas emprendidas no son plenamente de la aprobación de los Estados Unidos, pero en ese momento toda la atención se encuentra en la guerra de Vietnam, los problemas que se generan en este momento en América Latina son secundarios. En 1974, los Estados Unidos aparecen en el escenario, en defensa de los inversionistas y no en el desarrollo de la democracia, como objetivo prioritario que siempre habían esgrimido y pretendido implantar en el inicio de los sesenta en la mayoría de los países de América Latina: con el programa de la Alianza para el Progreso, cuyos resultados no fueron favorables. (Dabène, 2001).

El gobierno estadounidense había cambiado de estrategia en su lucha contra la difusión del comunismo, a partir del ejemplo de Cuba. Razón por la cual asumió como estrategia la asistencia militar, "Los militares latinoamericanos serán los verdaderos beneficiarios de la fobia de una nueva Cuba. Ellos se sienten en los años setenta con el coraje de ocupar la escena política, mientras que las técnicas de contrainsurgencia provocan mayor malestar dentro de la sociedad civil" (Dabène, 2001, 114).

Perú sorprende a América Latina por la forma de gobierno de los militares: por el desarrollo humanista, la armonía, la justicia y la dignidad. La reforma agraria se caracteriza por la forma radical de aplicación.

En 1969 Velasco Alvarado declara a los campesinos que los grandes propietarios no se seguirán nutriendo con su miseria. Las explotaciones de caña de azúcar de la costa fueron expropiadas y entregadas a cooperativas agrícolas para el manejo de su producción; no se desmantelaron, se buscaba mantener el nivel de productividad. En sí la reforma distribuye poco. El objetivo es romper con el dualismo, afectando a la oligarquía. Las grandes propiedades comunales indígenas pasaron a conformar Sociedades Agrícolas de Interés Social SAIS. En pocos años había logrado que tres cuartas partes de las tierras cultivadas fueran administradas por cooperativas, habiendo desaparecido la figura de la gran propiedad.

En las ciudades se iniciaron actividades para organizar las barriadas, con políticas para acabar con la vivienda precaria, con mejoramiento en las condiciones de vida y el acceso a la propiedad. Se crearon oficinas para capacitar a la población en actividades comunitarias de autoorganización.

En 1971, el gobierno revolucionario busca apoyo más amplio en los obreros y los campesinos, dando nacimiento al Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, SINAMOS. Velasco busca con este sistema depurar el régimen político del carácter elitista y lograr que la democracia tuviera realmente una amplia base participativa de la

población. No se busca instalar el socialismo, se busca mediante una empresa, incorporar a las clases desfavorecidas rurales y urbanas en el desarrollo del país.

Perú había mantenido hasta mediados de los setenta su modelo tradicional basado en las exportaciones; la llegada de la revolución en 1968, dio lugar al cambio de eje de desarrollo, ahora todos los esfuerzos se llevaron para un desarrollo hacia adentro, reduciéndose el comercio en más de dos tercios en una década. (Bulmer-Thomas, 1998).

Pero, de otra parte, el modelo progresista necesitaba de bienes importados; entre 1972 y 1975 los volúmenes importados se elevaron en un 85%, particularmente en bienes de capital, que se incrementaron en un 170%, mientras que los bienes de consumo corrientes y duraderos lo hicieron en un 30%. Muchos de los bienes se requerían para el sector público, en la realización de proyectos de inversión. (Pinto y Assael, 1981).

El gobierno de Velasco Alvarado para mantener su política progresista, mantuvo la tasa de cambio estancada durante ocho años, desde 1967 hasta 1975, ocasionando distorsiones en los precios internos y sobrevaluación de la moneda nacional, teniendo como expresión resultante los efectos negativos sobre la economía.

Entre 1969 y 1971 el país es castigado con el 'bloqueo financiero' por el proceso de nacionalización de la empresa transnacional que controlaba el petróleo; sin embargo entre 1972 y 1974 la situación cambió radicalmente ante las expectativas de nuevos hallazgos de yacimientos de petróleo, que llevó a poner a disposición créditos internacionales. (Pinto y Assael, 1981).

Aún así la oposición crece; es liderada por los sindicatos dominados por el APRA, especialmente porque los campesinos no pueden satisfacer las condiciones rígidas del SINAMOS. Las elites son hostiles a la experiencia y las clases medias no están de acuerdo con la condición autoritaria del régimen. Con la situación económica que desmejora y la presión de Estados Unidos, se debilita el gobierno.

El 29 de agosto de 1975 fue derrocado por el General Morales Bermúdez, quien comienza por desmontar el aparato reformador de siete años. Se inicia un periodo de austeridad económica, favoreciendo las condiciones para la inversión extranjera.

A partir de 1978 se da aumento de las exportaciones, estimuladas por los términos de intercambios comerciales, manteniendo el dominio los productos tradicionales, particularmente los minerales. Las importaciones resultaron bastante sensibles a las

reducciones arancelarias, llevando al crecimiento del déficit comercial en proporciones inmanejables. (Bulmer-Thomas, 1998).

Las medidas establecidas llevaron a la división en el interior de las fuerzas armadas, prefiriendo iniciar una transición hacia la democracia en julio de 1977. Se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, conformada por 100 miembros, en la que el APRA logra el 35%, Izquierda Unida el 29%, dando un avance sobre el porvenir de las elecciones presidenciales.

Belaunde Terry fue elegido el 18 de mayo de 1980. El partido comunista peruano –Sendero Luminoso– generó disturbios en el proceso electoral para crear condiciones de ilegitimidad del nuevo gobierno. Se da un proceso revolucionario tanto de la guerrilla Sendero Luminoso, como del movimiento Tupac Amaruc, que obliga a Belaúnde Terry en 1983, a dar carta blanca a las fuerzas armadas, situación que agudizó el aumento de las violaciones de los derechos humanos. (Dabène, 2001).

Venezuela

A inicios del siglo XX Venezuela es un país eminentemente agrícola y ganadero. Por estar su territorio ubicado en la zona cálida, con climas malsanos, su población es afectada por enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, la tuberculosis, así

como altos niveles de desnutrición incidiendo en la mortalidad infantil y afectando la esperanza de vida, a la vez que se presenta una densidad poblacional muy baja.

Las exportaciones estaban basadas en café, cacao, ganado y maderas. A partir de 1928 el petróleo se transforma en el principal producto de exportación.

Desde 1908, Juan Vicente Gómez ejerció el poder en Venezuela hasta 1935, —con intervalos en que ejercieron el poder presidentes provisionales—, en calidad de dictador, de comandante de las fuerzas militares o siendo elegido como presidente; en los veintisiete años de gobierno perdieron vigencia los partidos políticos y la mayor parte de sus dirigentes fueron exiliados.

Ante la ausencia de los partidos políticos, en México tres estudiantes: Rómulo Betancourt, Villalba y Raúl Leoni, lideraron la creación del Partido Revolucionario Venezolano PRV. Igualmente una organización de exiliados formó La Unión Obrera Venezolana. En 1931, se constituye el Partido Comunista de Venezuela y Acción Democrática AD en 1932.

Con la muerte de Gómez en 1935, asume el poder el General Eleazar López Contreras para completar el periodo constitucional, quien da inicio a un cambio total en la política,

comenzando por permitir el regreso de los exiliados. En este gobierno se crea la Oficina Nacional del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Higiene, y otras instituciones como la Contraloría General de la Nación.

El General López Contreras tiene una actitud favorable al movimiento obrero, en 1936 le dio reconocimiento a 109 sindicatos obreros y campesinos, aunque por disturbios presentados hacia la finalización de su gobierno, se ve obligado a aplicar prácticas represivas contra los movimientos obreros.

En septiembre de 1939 se dio la promulgación de la ley de creación del Banco Central de Venezuela mediante la conformación de una compañía anónima, iniciando operaciones en octubre de 1940. Antes existía la Oficina Nacional de Centralización de Cambios, que venía actuando en forma similar a un Banco Central. (Silva, 1979).

La explotación del petróleo ha significado para Venezuela desde sus inicios la fuente generadora de divisas, de ingresos fiscales, de saldos positivos en la balanza de pagos, así como la dinamizadora de las inversiones en otros sectores de la economía.

Empezando el siglo XX se dieron las primeras concesiones, a la vez que se

llevaba un intenso proceso exploratorio. Pero es a partir de la primera guerra mundial cuando el petróleo es considerado un bien estratégico, especialmente como combustible en el transporte. Consorcios anglo-holandeses iniciaron el proceso de explotación, más tarde ingresaron a la competencia las empresas estadounidenses.

En 1943 se aprueba la nueva Ley de Hidrocarburos, con la que se unifica el régimen de concesiones, se reglamentan los impuestos y se determina la obligación de la compañía petrolera para establecer la contabilidad de sus empresas en Venezuela. Estas acciones las desarrolla el gobierno para tener un mayor control sobre la explotación del hidrocarburo y por ende poder determinar su grado de participación, especialmente en la asignación de impuestos, variable importante, máxime cuando a partir de la segunda guerra mundial se intensifica su demanda.

Se dio en 1945 un distanciamiento entre los generales López Contreras y Medina Angarita, generándose una crisis al interior del ejército, que venía controlando y ejerciendo el gobierno desde 1899.

La Escuela Militar no se había modernizado, y de otra parte las normas correspondientes a los ascensos no estaban establecidas; los ascensos se llevaban a cabo por designación perso-

nal y no por los méritos alcanzados. Para dar solución, López Contreras envía a algunos militares a formarse en el exterior, especialmente en Perú.

Durante más de medio siglo, el Ejército había desempeñado simultáneamente: la presidencia de la República en cabeza del jefe máximo, elector del Congreso, de la Corte Federal, de los Concejos Municipales y Asambleas Legislativas, a la vez, comandante del Ejército. (Velásquez, 1979).

Un grupo de las autoridades militares buscaba los mecanismos para poder entrar en un gobierno democrático, se habían ido creando las instituciones necesarias para su modernización, pero un nuevo golpe militar se tomó el poder el 18 de octubre de 1945, apoyado por el partido social Acción Democrática. Se conformó una junta revolucionaria en la que participaron: Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios y los militares Delgado Chalbaud y Ricardo Vargas.

En este periodo de gobierno conocido como el trienio, se llevan a cabo varias reformas propuestas en su mayoría por el líder Rómulo Betancourt: la adopción del sufragio universal, la reforma agraria, la revisión de las regalías pagadas por las empresas petroleras al país, leyes favorables a los sindicatos, todo con el fin de avanzar en el proceso de democratización. Estas reformas no

fueron de la aprobación de las élites, lo que contribuyó a la destitución de la Junta. (Dabène, 2001).

En 1946, con la promulgación del estatuto electoral, que permite votar a todos los venezolanos mayores de 18 años, sin ninguna discriminación, se eligieron los representantes a la Asamblea Constituyente.

El 5 de julio de 1947 se promulga la nueva Constitución. Es elegido Rómulo Gallegos para el periodo 1948–1952; la presencia del petróleo incidía en la estructura del Estado, en el régimen fiscal y en general en la economía, lo que generó que muchos grupos se disputaran el poder.

Para el 24 de noviembre de 1948 se dio el golpe militar por Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez.

Asume el gobierno dictatorial Pérez Jiménez de 1952 a 1958, Pérez Jiménez anula las elecciones de 1952 y mediante un plebiscito se declara elegido por término indefinido. En 1957 se presenta una crisis fiscal; los abundantes ingresos recibidos por concepto del petróleo en los años cincuenta le facilitaron al dictador gastar sin límite, pero llegó el momento de la bancarrota. Tanto la elite conservadora como los mismos militares buscan la salida del dictador.

Los partidos políticos se unieron AD, COPEI y la URD (Unión Republicana

Democrática) formando en junio de 1957 una junta patriótica que coordinara las actividades y el 23 de enero de 1958 Pérez Jiménez deja el poder.

Entre los partidos políticos se hicieron acuerdos, se dieron las reglas de juego político en el pacto conocido de Punto Fijo, firmado el 31 de octubre de 1958, que constituye el acta de nacimiento de la democracia en Venezuela. Los partidos se comprometieron a respetar los resultados de las elecciones, se darían cuotas de poder a los partidos vencidos. Respetando estos acuerdos, en la primera contienda electoral salió ganador el partido AD, con su candidato Rómulo Betancourt. (Dabène, 2001).

En 1958 se llevó a cabo la modificación del impuesto sobre la renta y se aumentó la participación del Estado en la renta petrolera, llegando al punto de representar el 60%.

El 13 de febrero de 1959 se posesionó Rómulo Betancourt para el periodo 1959-1964. Para Venezuela fue un hecho histórico, era la primera vez que un presidente constitucional lograba terminar su periodo de gobierno y se daba inicio a un nuevo mandato presidencial. (Velásquez, 1979).

Con el inicio de los gobiernos democráticos se llevaron a cabo programas para impulsar la producción agrícola y ganadera; sustituir algunas de las importaciones en las que el país no

podía abastecerse: azúcar, arroz, ajonjolí, sustitución parcial en algodón, leche conservada. Incluso se llegaron a tener excedentes para la exportación.

Igualmente se hicieron estudios para el conocimiento de los suelos, control de plagas y sistemas de riego. Obras de infraestructura como carreteras de penetración, bodegas de almacenamiento; en general se buscó la integración entre el sector agrícola y el industrial.

En 1960 se llevó a cabo una reforma agraria con repartición de tierras, créditos, asistencia técnica, mejoramiento de servicios, buscando que la población campesina se arraigue en su medio y no tenga que recurrir a la migración hacia los centros urbanos.

Desde 1959 se inició una política arancelaria de protección de la industria. Venezuela había firmado con Estados Unidos en 1939 un Tratado de reciprocidad comercial, en el que cerca de 500 renglones se les daba el trato de nación más favorecida a los productos provenientes de Estados Unidos. (Silva, 1979).

En países como Venezuela donde el valor de las exportaciones hacía aumentar la demanda interna, en especial de bienes manufacturados, con una política arancelaria adecuada se pudo lograr el desarrollo del sector industrial en forma rápida; en los cincuenta, el crecimiento del sector

industrial estuvo alrededor del 13% anual.

Raúl Leoni es elegido para el periodo 1964-1969. Nuevamente un acto a celebrar, era la primera vez en ciento cincuenta y tres años que un partido entregaba el mando al partido opositor, a Rafael Caldera, para el periodo de 1969 a 1974.

Durante el gobierno de Caldera se estableció el impuesto sobre el valor agregado, así como la denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con Estados Unidos, que afectaba el desarrollo del sector industrial.

A partir de 1967, por medio de una reforma a la Ley de hidrocarburos se determinó que el Estado llevaría a cabo la explotación directa por medio de la Corporación Venezolana de Petróleo, o sólo mediante contratos suscritos con la Corporación. (Silva, 1979).

De 1974 a 1979 gobierna Carlos Andrés Pérez. En agosto de 1975 se da la promulgación de la ley orgánica que da al Estado la reserva del comercio y la industria de hidrocarburos; todas las fases de la industria petrolera quedaba en manos del Estado, dándose la extinción a las concesiones y concediendo indemnizaciones pactadas con las empresas afectadas.

Con las ganancias inesperadas debido a los altos precios del petróleo, se buscó el desarrollo de otros sectores.

En el caso de Venezuela se impulsó la industria siderúrgica, y la metalúrgica, en especial para el desarrollo de la producción de automóviles.

Venezuela aparece como uno de los pocos países que aprovechó la renta petrolera mucho antes de la nacionalización, contrario a otras economías donde este tipo de explotaciones realizadas por el capital extranjero, tiene pocas vinculaciones con el país receptor, transformándose en la mayoría de los países en un enclave económico. (Bulmer-Thomas, 1998).

Para controlar el ingreso a la corriente financiera nacional de los altos ingresos provenientes de las exportaciones se creó el Fondo de Inversiones de Venezuela, habiendo llegado incluso a dar ayudas a escala internacional.

Contradictoriamente se presentaron problemas económicos, como el crecimiento de la deuda externa, la que llegó a ser una amenaza para el país. Las altas rentas petroleras terminaron por afectar los niveles de consumo en perjuicio de los sectores productivos.

En el periodo 1979–1984 gobierna Luis Herrera Camping; en su plan de gobierno se establece que la agricultura y la industria deben constituir el motor del Estado. Da impulso a la educación desde la primaria hasta la formación científica y tecnológica, así como la aplicación de una política sanitaria.

El gobierno de Lusinchi firmó un convenio de refinanciamiento con el FMI, pero ante la baja en los precios del petróleo se vio en la necesidad de solicitar postergación para los pagos de amortización de la deuda en 1985 y 1986. En enero de 1986 el precio del petróleo era de 24 dólares, en marzo llegó a 13,42, llegando al precio más bajo en junio con 12,99 dólares por barril, con lo cual se afectaron los ingresos fiscales en cerca del cincuenta por ciento.

El problema se agrava aún más cuando el gobierno había iniciado desde periodos anteriores un plan de gasto público.

Conclusiones

Al llevar a cabo una visión histórica de los cinco países que conforman el grupo subregional andino, se puede afirmar que el principal problema que han tenido y tienen se concentra en la falta de autonomía para la determinación de sus políticas tanto internas como externas. Las decisiones han sido manipuladas por agentes externos desde el mismo momento de la conquista; su organización social, económica y política fue implantada durante la colonia, con el establecimiento de instituciones para ejercer dominio y control sobre la población, especialmente en el campo de la producción, con miras a garantizar los recaudos. Cuando adquieren la independencia, mantienen la dependencia de los

centros económicos que les aseguran créditos, a la vez que en sus territorios se llevan a cabo las transformaciones y controles requeridos para la explotación de los recursos, necesarios para el desarrollo económico de los centros.

Cuando sus líderes logran estructurar las nuevas repúblicas, sus instituciones no sufren mayores cambios, incluso se dan situaciones en que las afianzan, como ocurrió con la iglesia católica, que llegó a ser la mayor latifundista. En el campo económico la mayoría de actividades de explotación económica terminan en manos de empresas de capital extranjero, generalmente empresas de E. U., que han llevado el control total del ciclo productivo, o de la extracción de minerales o de petróleo, dejando en algunos casos las regalías, que nunca compensan ni el daño al medio ambiente, ni al valor extraído.

Tal vez uno de los mayores perjuicios causados a estas economías es el no haber propiciado una articulación de los sectores exportadores con los sectores productivos domésticos; siempre actuando como enclaves económicos, agudizando la inequitativa distribución del ingreso en la población.

Estos países han contado con un monitoreo constante de los Estados Unidos; en el campo político, queriendo de manera impositiva implantar la

democracia, no bajo la concepción filosófica de ésta, sino apenas en la modalidad de democracia formal; manteniendo un control al posible contagio del comunismo, aún con mecanismos violatorios de los derechos humanos; auspiciando la formación de militares para el logro de sus objetivos.

La falta de autonomía se ha dado igualmente en el campo económico, al tener la permanente atadura de la deuda externa, bajo el principio de que sólo mediante ésta es posible lograr la senda del crecimiento, salir del atraso y del subdesarrollo. Algunos analistas comentan que los países de América Latina, por concepto del servicio de la deuda externa, en la década de los ochenta giraron más de lo que se gastó en el Plan Marshal.

En la mayoría de los casos al representar la deuda externa un alto porcentaje del PIB, e igualmente de las exportaciones, ha restringido el desarrollo de las actividades de exportación, ya que debido a la alta dependencia tecnológica, y en algunos casos de materias primas, se han desviado divisas para el cumplimiento del servicio de la deuda, obligando a la reducción de importaciones de estos bienes, a la vez que sacrifica los potenciales de exportación, y se le impide y retrasa el desarrollo de actividades que pueden mejorar su competitividad en el ámbito internacional.

La dependencia no es sólo económica, es también tecnológica. A diferencia de los países del sudeste asiático que tuvieron dependencia tecnológica, sólo mientras se pusieron al nivel de sus proveedores, logrando crear su propia tecnología. Esta situación fue posible gracias a la inversión de los estados en educación y capacitación, factor clave para la formación de capital humano. El gasto en educación ha sido y sigue siendo muy bajo en la región andina; para 1985 el gasto público en educación en promedio alcanzó un 3,3% como porcentaje del PIB, para 1990 aunque se ha aumentado al 4,5% en promedio sigue siendo bajo, repercutiendo en la carencia de científicos y personal formado en ciencias básicas que propicien la innovación y creación de tecnología.

La dependencia se ha dado en otros campos, como la imposición de programas, como fue la Alianza para el Progreso; cuando los países latinoamericanos estaban en el proceso de conformación de la ALALC, su propuesta era en cierta forma boicoteada, por que competía con el programa por ellos propuesto.

En la década de los noventa la propuesta de los Estados Unidos es el ALCA, el que pone en aprietos a los procesos de integración, a la vez que crea mecanismos para forzar a negociar individualmente, cuando al interior del MERCOSUR o la CAN, o la misma ALADI, se plantea tímidamente negociar en bloque.

Al interior del subgrupo regional se presentaron problemas en la definición de fronteras; entre Perú y Ecuador y el diferendo existente y sin definición entre Venezuela y Colombia. Esta situación afecta temporalmente al proceso de integración.

Los países estudiados presentan fundamentalmente un problema generalizado en la inestabilidad política. Más aguda en la medida de mayor riqueza en el subsuelo, lo que genera muchos intereses encontrados, como ocurrió con Venezuela, en Bolivia, Perú y Ecuador, generalizándose los golpes militares, o en ocasiones gobiernos populistas que no pueden cumplir con las obras prometidas y el pueblo reacciona con violencia, llevando a regímenes fuertes.

En el caso de Colombia donde se ha llevado a cabo un periodo mayor de gobiernos civiles, ha sido una democracia limitada, al no permitir la presencia de otros partidos políticos fuera de los tradicionales.

La presencia de la inestabilidad política afecta a los países y a las relaciones dentro del subgrupo, al no permitirles, o bien continuidad en el gobierno, o al estar pendientes de solucionar problemas internos, les impide llevar a cabo el cumplimiento de planes y programas. Igualmente es corriente encontrar que muchos de los incumplimientos de compromisos pactados al interior del subgrupo, se dan por falta de voluntad política, encuentran-

do contradicción entre los acuerdos pactados y las memorias de los frecuentes encuentros de presidentes, ministros, delegados, con los desarrollos al interior de cada país.

Los países al interior de sus economías presentan varios problemas: la presencia de altos niveles de población en condiciones de pobreza y grupos de indigencia, que cada día crece porcentualmente, sin encontrar solución en el corto plazo. Paralelo a este hecho se encuentran situaciones de desigualdad en el ingreso, explicada por los bajos niveles de capacitación que tiene la mayoría de la población, que no le permite lograr niveles de productividad mayores. Pero igualmente por la falta de oportunidades en el empleo, y la determinación de salarios apenas de subsistencia para la mayoría de la población económicamente activa que se encuentra trabajando.

El problema de la desigualdad en los ingresos y los altos volúmenes de población pobre afecta el mercado interno al carecer de poder de compra. Hoy se habla de un problema que desde hace unos años se viene presentando, el alto grado de informalidad, no sólo en el empleo, sino en muchas actividades, complementado con el subempleo, que se ha ido generalizando en la medida que se impone el desarrollo del modelo neoliberal.

Estos problemas no sólo afectan la demanda interna, sino que además

reducen la posibilidad de que se integren las actividades económicas y sociales internamente, impidiendo el desarrollo de actividades competitivas, como lo plantea la teoría, del aprovechamiento de las economías de escala, la elevación de la productividad y la facilidad para competir en los mercados externos.

Sin embargo, en la década de los noventa los países en su mayoría han adoptado y desarrollado las políticas de ajuste diseñadas por el FMI, lo que los ha llevado a cumplir las condiciones por ellos establecidas, que a la vez favorecen el desarrollo del modelo neoliberal, y que para efectos del proceso de integración han resultado relativamente favorables, al haber logrado niveles de inflación de un dígito, o la relación de deuda externa pública respecto al PIB, dentro de los límites favorables. Pero el que los países puedan cumplir con los lineamientos externos determinados por el FMI, no significa que sean igualmente válidos para la dinamización de la integración. En el caso del logro de tasas de inflación de un dígito ha sido a través de políticas que han restringido la demanda; logradas mediante la congelación del salario, con pérdida del poder de compra real, reducción y flexibilización del empleo, políticas que no pueden contribuir con la ampliación del mercado, sino por el contrario con su reducción.

Bibliografía

- AYALA MORA, Enrique. (1999). "Resumen de historia del Ecuador" Obra suministrada por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Quito, enero de 1999. Biblioteca Digital Andina
- BEJARANO ÁVILA, Jesús Antonio, (1988a) "La economía entre 1930 y 1945" en "La nueva Historia de Colombia. Editorial Planeta.
- _____, (1988b), "La economía colombiana entre 1946 y 1958" en "Nueva historia de Colombia" Editorial Planeta.
- BID (1994), "Progreso económico y social en América Latina. Informe 1994.
- BULMER-THOMAS, Victor. (1998). "La historia económica de América Latina desde la independencia". FCE.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S.; PÉREZ BRIGNOLI, Héctor. (1979). "Historia económica de América Latina" (Tomos I y II). Editorial Folio. Barcelona.
- DABÈNE, Oliver. (2001). L'Amérique Latine au 20 siècle" Armand Colin. Paris.
- GAVIRIA G., Juan Felipe. (1988). "La economía colombiana 1958- 1970" en "Nueva historia de Colombia". Editorial Planeta.
- KALMANOVITZ, Salomón. (1997). "Las instituciones, la ley y el desarrollo económico", en revista Ensayo y Error Nº 2. Bogotá.
- _____, (1999). "Economía y Nación. Una breve historia de Colombia" cuarta edición corregida y aumentada. Tercer Mundo editores. Bogotá.
- PERRY, Guillermo. (1988). "La economía colombiana, desde 1970 hasta nuestros días", en "Nueva historia de Colombia". Editorial Planeta.
- PINTO, Aníbal y ASSAEL, Héctor. (1981). "Perú 1968 – 1977: la política económica en un proceso de cambio global". Estudios e informes de la CEPAL. Naciones Unidas.
- PIPITONE, Ugo. (1996). "Asia y América Latina. Entre el desarrollo y la frustración". Editorial: Los libros de la Catarata. Madrid.
- RAMÍREZ COLINA, Oswaldo. (2002). "Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones, 1969-2000" en internet-monografías.
- SANABRIA, Hernando. (1982). "Historia Elemental de Bolivia", Editorial Juventud. La Paz.
- SILVA, Carlos Rafael. (1979). "Bosquejo histórico del desenvolvimiento de la economía venezolana en el siglo XX", en "Venezuela moderna, medio siglo de historia 1926- 1976". Ariel.
- VELÁSQUEZ, Ramón J. (1979). "Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo" en Venezuela Moderna. Medio siglo de historia 1926-1976. Editorial Ariel.